La izquierda uruguaya. Entre la oposición y el gobierno

Jorge Lanzaro

Jorge Lanzaro: director del Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo.

Palabras clave: izquierda, sistema político, Frente Amplio, Uruguay.

Resumen:

En las peculiares claves de su democracia pluralista, el Uruguay ha sido gobernado en régimen de presidencialismo de compromiso y recorre la experiencia del presidencialismo de coalición, mediante una gestación de políticas públicas y de reformas estructurales, necesariamente negociada, que exige transacciones y márgenes consensuales anchos. Para ganar y para gobernar, el Frente Amplio –que ha pasado por muchas innovaciones- tendría que estrenarse también en estas sintonías. Es un desafío de enorme importancia, para la izquierda y para el país.

Las elecciones de 1994 dejaron un saldo impactante: la división de los votos en tres tercios, con los competidores mayores casi empatados y un cuarto grupo que consigue su cuota, en un esquema que confirma la pluralidad partidaria que se viene perfilando desde 1971 y refleja el crecimiento sostenido que experimenta la izquierda en los últimos 30 años.

Presidencialismo de coalición y reforma electoral

El Partido Colorado gana con el 32,2% de los votos. Los «blancos» del Partido Nacional salen segundos con el 31,2%. El Frente Amplio (FA) –decano de la izquierda nacional, que en esta ocasión armó con algún agregado la fórmula del Encuentro Progresista— llega al 30,6%. Y el nuevo Nuevo Espacio (desprendimiento del Frente Amplio, de orientación centrista) consigue un 5,2%. E1FA aumenta de manera significativa su cota a nivel nacional (18,3% en su estreno de 1971, algo más del 21% en 1984 y en 1989). Triunfa en Montevideo por segunda vez, con mucha comodidad (44,1%) y duplica prácticamente su presencia en el interior (19,5%, contra alrededor del 10% en las tres elecciones anteriores).

La primera respuesta a este acontecimiento ha sido igualmente inédita y relevante. El presidente Sanguinetti –que en las urnas obtuvo una ventaja escueta, de minoría mayor– inicia su segundo mandato con el armado de una «gran coalición», que comprende a todos los sectores del Partido Colorado y

del Partido Nacional, con un pacto programático que se traduce en la composición del gabinete ministerial, en la designación de los cuadros superiores de la administración, en la procesualidad de las decisiones políticas y de los andamientos parlamentarios.

Este acuerdo –ante el cual el FA queda como tercero en discordia- suministra un marco de amplitud para las tratativas de gobierno y encauza la implementación de una ambiciosa agenda de reformas, que toca a los nudos cruciales del ciclo actual de modernización: incluyendo materias en las que ha habido progresos durante las dos administraciones anteriores, abriendo la posibilidad de avanzar en otras, cuyo tratamiento se demoró o fue «bloqueado».

El país afronta de esta manera otro «ajuste» y trata de apurar la reestructuración de su modelo de desarrollo, insistiendo en los rumbos de política económica, encarando la reforma de la educación y de la seguridad social, extendiendo la reforma del Estado, la reconversión productiva, la «apertura» y la integración regional.

Este experimento de «presidencialismo de coalición» se puso en práctica sin que hubiera modificaciones en la constitución vigente, extremando los recursos de una composición pluralista secular. Es una novedad mayúscula, pero supone asimismo una continuidad en las culturas vernáculas del pluralismo –de nuestro peculiar «presidencialismo de compromiso»— que se asienta en un juego nutrido de transacciones entre sectores de los dos grandes partidos tradicionales, da lugar a la «coparticipación» de blancos y colorados en las jerarquías superiores del Estado (empresas, servicios públicos, organismos de contralor) y reconoce incluso otras fórmulas de coalición en régimen presidencial, de calibre y visibilidad diversa.

Como he planteado en otro trabajo: tal cual ocurre con los parlamentarismos, los presidencialismos pueden ser clasificados como regímenes de corte mayoritario o como regímenes de corte pluralista¹. En el primer género, el gobierno está sujeto al dominio más o menos exclusivo de la mayoría ganadora y puede a veces asentarse en una ecuación plebiscitaria, con inclinaciones populistas; en el segundo, los poderes están «divididos» y el gobierno se ejerce en forma más compartida y negociada. El corte depende de las propias características del régimen de gobierno, del esquema de equilibrios y de separación de poderes que regula las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, de los principios electorales y de la estructura del sistema de partidos, de las matrices de cultura política, de los estilos de liderazgo y de otros elementos, estructurales y de coyuntura, formales e informales, que componen las variantes de un tipo determinado de democracia (precisamente: mayoritaria o pluralista). Esta óptica ayuda a reconsiderar el debate

_

¹ Jorge Lanzaro: «Uruguay: las alternativas de un presidencialismo pluralista», en *Revista Mexicana de Sociología*, 2/1998, artículo en el que retomo categorías acuñadas por algunos autores clásicos (Max Weber, Robert Dahl, Arend Lijphart) y trato de aplicarlas en la clasificación de los presidencialismos, sumándome a los estudios que escapan a las visiones «pro-parlamentaristas» corrientes y proponen una revalorización de la democracia presidencial

parlamentarismo versus presidencialismo y permite ver con otros ojos los recorridos de América Latina, en el horizonte histórico y en la etapa democrática actual.

En el caso uruguayo hemos tenido episodios de presidencialismo «duro», autoritario y adversativo. A lo largo del siglo, predominó sin embargo un presidencialismo de compromiso, del que fueron protagonistas principales los dos grandes partidos tradicionales. Con otras características y en un escenario pluripartidista inédito, en el que se siente la tercería de la izquierda, el presidencialismo de compromiso volvió a regir después de la última dictadura, a partir de 1985, cuando el país comenzó a encarar el paquete de reformas estructurales que configuran la «segunda» transición². Nuestro régimen presidencial pluralista también tuvo lugar para las coaliciones –demostrando que éstas no quedan reservadas a los regímenes parlamentarios—: en la década del 40, a principios de los 70 –en el umbral de la dictadura— en el primer tramo de la presidencia de Lacalle (1990-1992) y con el gobierno que se inaugura en 1995, acompañando las experiencias que se presentan en otros países de América Latina (como Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica).

Tras ello se da impulso a una reforma constitucional. A la luz de los resultados parejos de los comicios de 1994, la ruptura del bipartidismo tradicional y las expectativas –para algunos «amenazantes»– que genera el ascenso de la izquierda frenteamplista, entramos en un nuevo capítulo que va a desembocar en la reforma de 1996, ratificada mediante plebiscito, por una mayoría más que ajustada³.

En lo que es su designio fundamental, la reforma refuerza la figura presidencial y busca promover la construcción de mayorías –enfocando hacia las coaliciones interpartidarias– que puedan proporcionar apoyos más extensos para las candidaturas en carrera y para las gestiones gubernamentales. El articulado agrega facilidades para hacer valer los vetos presidenciales en el proceso legislativo y aligera el trámite de las «leyes de urgencia». Pero se centra sobre todo en el régimen de elección presidencial. Establece la candidatura única para todos los partidos, mediante elecciones internas, a realizarse en la misma fecha, a padrón abierto y con participación voluntaria. Quedan eliminados en este nivel algunos elementos típicos de la ley de lemas: como el «doble voto simultáneo», la multiplicidad de candidaturas de un mismo partido y la acumulación de sufragios entre ellas. Se instaura además la segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas, para el caso de que

² Cf. J. Lanzaro: «La doble transición en el Uruguay: gobierno de partidos y neopresidencialismo» en *Nueva Sociedad* Nº 128, 1993.

³ Un 50,4% de votos por el «sí», que pasan raspando la mayoría absoluta requerida por la Constitución para ratificar la reforma; un 46,2% por «no», más 1,9% en blanco (que cuentan también en contra), con 1,4% de votos anulados. En el voto afirmativo se alinea el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Nuevo Espacio y unos cuantos frentistas (incluyendo a Seregni, al senador Astori y a sus seguidores). En el «no» se ubica el grueso del Frente Amplio y algunos sectores de los partidos tradicionales, con un margen importante de desobediencia. Vale consignar que el FA participó en la comisión de delegados de los cuatro partidos que preparó el texto plebiscitado. Posteriormente, un golpe de timón de Vázquez lo ubicó en una postura de rechazo, lo que dejó en falsa escuadra a los negociadores, provocó el descontento de muchos frentistas y fue el eslabón final de una cadena de desencuentros que determinó la

ninguna haya obtenido la mayoría absoluta. En la vuelta inicial se vota conjuntamente la presidencia y el parlamento. En el segundo turno se disputa solamente el cargo presidencial.

En 1999 tendremos pues una zafra electoral nutrida: las internas de todos los partidos en abril, las parlamentarias y la primera vuelta presidencial en octubre, más la posibilidad de una segunda vuelta presidencial, en noviembre. El nuevo presidente asumirá en marzo del 2000, poco antes de las elecciones municipales, que hasta ahora se hacían junto con las nacionales y en adelante se cumplirán en forma separada, aunque consecutiva, en el siguiente mes de mayo.

El estatuto sancionado mantiene la representación proporcional «integral» para la elección legislativa –que ha sido uno de los pilares del sistema uruguayopero se aparta del principio de pluralidad que regía la elección presidencial. Con las nuevas reglas, esta carrera ha de transcurrir en términos más concentrados y sobre bases mayoritarias. El diseño ordena la competencia en torno a un menor número de figuras y de opciones políticas, queriendo promover la hechura de coaliciones electorales, que podrían a su vez proyectarse como coaliciones de gobierno: en las internas de cada partido, en el apronte de la primera vuelta y para enfrentar virtualmente el «ballottage», como articulación habilitante de la presidencia, en un juego que llegaría a condicionar los alineamientos parlamentarios.

La nueva fórmula constitucional puede servir para prolongar la textura pluralista y la política de compromisos, insistiendo en la formación de coaliciones, electorales y de gobierno. Como eventualidad, abre también una alternativa de democracia «plebiscitaria», con un presidente electo por el régimen de mayoría –de entrada o en la segunda vuelta– frente a un parlamento electo definitivamente en la primera vuelta, basado en la representación proporcional estricta y reflejando el mapa pluripartidista existente. Aunque la primera hipótesis es la más probable y la más promisoria dentro del cuadro actual, ambas ecuaciones son posibles y serán puestas a prueba en las elecciones de 1999, justo cuando el tronco mayor de la izquierda tiene la oportunidad de concursar por el gobierno⁴.

En efecto, hoy por hoy, en una tendencia que se muestra firme, las encuestas ubican al Frente Amplio a la cabeza de la lista de preferencias y Tabaré Vázquez –su candidato cantado- aparece con posibilidades de entrar a la segunda vuelta y hasta de imponerse en la primera, con porcentajes de

-

⁴ Como se dijo, ésta fue una de las razones fundamentales para llegar a la reforma. En condiciones de pluripartidismo, el requerimiento de mayorías superiores, a través del «ballottage», vale para cualquiera de los contendientes. Pero apunta de manera particular a un triunfo de la izquierda. En el espíritu de muchos, para dificultarlo. En el mejor de los casos, para que se produzca con márgenes de consenso más amplios, contando eventualmente con voluntades de otros partidos, procurando evitar los riesgos de una situación como la que se dio en Chile con el gobierno de Salvador Allende. Este fue uno de los factores que llevó a dirigentes y a votantes de la izquierda a adherir a la reforma, en el proceso de elaboración y en

popularidad o de intención de voto considerables, que distan sin embargo de la mayoría absoluta⁵.

En todo caso, los saldos de esa competencia y las posibilidades de la segunda vuelta dependen de cómo se desenvuelva en su momento la campaña electoral, del perfil de los candidatos blancos y colorados, que recién han de definirse en las primarias de 1999, del desempeño y las convergencias de los dirigentes y de los votantes de las divisas tradicionales y de la izquierda no frentista, en los lances de la primera vuelta y en los de la segunda, que obligan a sumar voluntades por encima de las fronteras partidarias.

El resultado depende también de la oferta política que el FA y su candidato logren articular de aquí a allá, de la ampliación de su convocatoria y de su capacidad para tender puentes con otros sectores partidarios. Sus acumulaciones se asientan en los últimos tiempos en una lógica dual, en la que se combina una oposición más o menos acerada, el carisma personal de Vázquez, las pruebas de la administración de Montevideo, así como la presencia de sectores y posturas de sesgo moderado, que por momentos pierden terreno (el general Seregni, el senador Danilo Astori, el actual intendente Mariano Arana).

De más en más, la escuadra tiene que mostrarse asimismo como opción efectiva de gobierno a nivel nacional y como opción efectiva de compromiso –mediante una lógica de oposición «responsable» y eficaz, de la que aún no da pruebas consistentes— dentro de un horizonte pluralista, con tres conjuntos partidarios competitivos y un cuarto actor que puede intervenir como minoría decisiva.

De la adscripción corporativa a la izquierda «nacional y popular»

La actual ubicación de la izquierda uruguaya es el resultado de una metamorfosis de envergadura, que lleva casi cuatro décadas.

En la época del segundo batllismo, que se inicia en los años 40, la izquierda se conforma con partidos de ideas, que tienen una audiencia electoral muy baja y practican un oficio testimonial o de «picana», subordinado a la collera de blancos y colorados. Al mismo tiempo obran como núcleos significativos de integración social, con un dominio sindical robusto y creciente. En clave ciudadana y a través de las redes de clientela, los partidos tradicionales se llevan la inmensa mayoría de los votos. Pero la dirección de los gremios queda en manos de la izquierda, que a raíz de ello obtiene puestos estratégicos en los organismos tripartitos de regulación del salario y de administración de la seguridad social, accediendo a una suerte de «coparticipación corporativa»⁶.

-

⁵ Según la encuesta de julio de 1998 de la empresa Equipos Consultores, el Frente Amplio - Encuentro Progresista alcanza el 32% de las intenciones de voto a nivel nacional, habiendo oscilado anteriormente entre el 29 y el 34. Vázquez recoge simpatías –de votantes y no votantes– que se ubican en el 40% (con marcas anteriores que van del 33% al 43%). También recoge el 42% de antipatía (con marcas anteriores similares), siendo así la figura que genera mayor polarización.

⁶ Gracias a la intervención de los sindicatos y de las cámaras empresariales en los cuerpos de

En la década del 60, con la crisis del Uruguay batllista, asistimos a la nacionalización de la izquierda (en el sentido de Gramsci). El proceso implica una reformulación ideológica –que remonta la ajenidad de los discursos precedentes– y pasa por dos pistas: extendiendo de manera entrelazada los arribajes corporativos, la convocatoria movimientista de la central sindical y las formaciones de partido, en una incursión que mejora las salidas electorales.

El movimiento sindical se unifica en torno a una plataforma que excede las reivindicaciones particulares, operando como agente de convocatoria general, fuerza de veto y cuerpo de organización política, con vuelo propio y como «público orgánico» de los experimentos frentistas de la izquierda. Estos desembocan finalmente en la fundación del Frente Amplio, en 1971: una coalición «nacional y popular» algo inaudita, llamada sin embargo a perdurar, que une a los veteranos de la izquierda (socialistas, comunistas, independientes), con la democracia cristiana y sectores desprendidos de los partidos tradicionales. Mediante pases de contraposición, pero asimismo de enlace, también surgen en los años 60 los Tupamaros y otros focos de acción armada.

En esas gestas la izquierda hace sus primeros pininos de tradicionalización, empieza a admitir el juego de personalidades, recurre sin pudores al mecanismo de la ley de lemas –que tanto había denostado– y usa los arbitrios comunes de la competencia electoral, abriendo una brecha en el añoso bipartidismo dominante. El general Seregni, candidato unitario en el estreno de 1971, que va probándose como dirigente en las vicisitudes siguientes y en la resistencia a la dictadura, es en este sentido una figura emblemática.

Estos avances se ven envueltos en una polarización creciente, en un curso alimentado por tirios y troyanos, que descompone el sistema de partidos, la cultura negocial y los códigos de lealtad. La izquierda queda atravesada por emergencias que desconocen el pluralismo y militan en un jacobinismo abrupto, adentrándose en una lógica adversativa, con cierto menosprecio por las reglas de una democracia «formal», que pasa por una fase de deterioro y terminará sufriendo una ruptura catastrófica.

Un partido de «nuevo tipo» en un sistema que cambia

En la transición que comienza en 1980 y que nos permite salir de la dictadura instaurada en 1973, se confirma el realineamiento del sistema y la izquierda ratifica su presencia, deduciendo una tercería de relevancia: gracias a su papel en la recuperación democrática y a su performance electoral, en virtud de una

keynesianismo criollo, desde los umbrales de la crisis de 1930, hubo en el Uruguay un corporativismo de corte democrático y liberal –sujeto al dominio general de los partidos tradicionales y a la dirigencia particular de los grupos de izquierda– en un esquema paralelo y a la vez distinto, del que se dibujó por la misma época en los populismos latinoamericanos y en las comarcas europeas (con la socialdemocracia, la democracia cristiana y el liberalismo social). Cf. J. Lanzaro: *Sindicatos y sistema político*, FCU, Montevideo, 1986. Para una visión amplia de las formas del corporativismo en Europa y en América Latina, en sus distintas etapas, en sistemas democráticos y en sistemas autoritarios, ver J. Lanzaro (comp.): *El fin del*

transformación sustantiva y por la posibilidad de incidir en los procesos de decisión política.

En las elecciones de 1984, que inauguran el ciclo posautoritario, el FA sacó el 21,3% de los votos, sumando tres puntos a su votación inicial de 1971. En Montevideo, donde tiene la mayor audiencia, superó su marca previa (30,1%), llegando al 33,7%. En la víspera de los comicios de 1989, se produjo la escisión del Nuevo Espacio, constituido por grupos del ala más centrista⁷. A pesar de ese corte, el FA ganó la Intendencia de Montevideo (con el 34,5% de los votos del departamento) y mantuvo su cuota a nivel nacional (21,2%). El Nuevo Espacio consiguió por su lado el 9 en todo el país y el 13% en Montevideo.

En ese tiempo asistimos a un proceso de integración, favorecido por el espíritu inclusivo con que se encaró inicialmente la reconstitución del sistema político, lo que lleva a remontar los desgarramientos precedentes y restablece las ligaduras nacionales. La izquierda acentúa su tradicionalización, en un esquema que la hace parecerse y diferenciarse de las divisas históricas, afirmando su propia identidad, dentro de un cuadro de oposición acotada, de cierta trivialización de la competencia y de los conflictos, sin la amenaza de un vuelco radical. La falange frentista participa en las negociaciones –y de manera especial, en el Pacto del Club Naval– que franquean la salida de la dictadura. Aunque sus distintos sectores tiran desparejo, registrándose altibajos, repliegues y tramos a la deriva, una vez en democracia, la izquierda entra de lleno a las arenas públicas, interviene a su manera en las alternativas políticas, pesa en los juegos de «bloqueo» y también en algunos compromisos, obstaculizando durante algunos años el acercamiento de los dos partidos tradicionales. Asimismo adelanta en los experimentos de gobierno a nivel municipal, en una gestión no exenta de tropiezos, que resulta empero razonable y propone novedades, aportando su sello y cobrando legitimidad. Por otro lado, irá haciendo sus pruebas en el trabajo parlamentario y durante el primer mandato de Sanguinetti (1985-1990), ingresa a los directorios de algunas empresas públicas, en una clave de coparticipación ampliada, en la que convive con representantes de los dos partidos tradicionales y que posteriormente no se renovará.

Este progreso se vincula con la aparición de nuevos liderazgos, la variación ideológica y un derrotero político relativamente moderado. Es un momento de inflexión: en el que están vencidas las antiguas certezas y las claves de doctrina. Los asentamientos históricos, la nacionalización iniciada en los 60, los lugares obtenidos en la resistencia, en la transición y en la democracia restaurada permiten sortear los efectos que de otra manera pudo tener el derrumbe del socialismo real. Las lógicas militantes tienden a ser desplazadas por la competencia electoral. Se mantiene –con otra autonomía– la

La Democracia Cristiana y el PGP, que luego del asesinato de Zelmar Michelini es dirigido por Hugo Batalla. Posteriormente el Nuevo Espacio se desarma y queda al mando de Rafael Michelini (hijo de Zelmar). Batalla es hoy vicepresidente de la República, como compañero de formula de Sanguinetti en 1994, y se reintegra al Partido Colorado –del cual salió en 1962 junto a Zelmar Michelini–, con un sector político que ha perdido mucho peso. La Democracia

«hermandad» con los sindicatos. No obstante, los públicos orgánicos y la «classe gardée» dan paso a la apelación ciudadana y a una nueva fisonomía de conglomerado popular, acentuando largamente los perfiles de «catch-all party» que aparecieron antes de la dictadura.

Se va conformando en este viaje un partido de nuevo tipo, con una articulación mutante, en la que encajan varias familias políticas y compiten posturas diversas. Lo que en el origen se constituyó como una coalición de partidos (un frente integrado), se vuelve luego un partido de coalición y tiende a ser finalmente un partido unificado («popular»). En su seno siguen actuando los socios fundadores, pero pesan también las unidades creadas desde su inicio como nucleamientos frentistas, con algunos antepasados en la colectividad o directamente como sectores nuevos⁸. En todo caso, ni los nuevos, ni los viejos, aunque quarden su nombre, constituyen partidos autónomos: son fracciones de un conglomerado complejo, con su identidad propia y las marcas de su biografía histórica, pero en un esquema comparable al de otros ruedos partidarios. Más allá de las adhesiones que puedan tener los distintos grupos, hay una filiación frentista genérica, que se agranda y se afirma. Actualmente, la tradición pesa aquí tanto o más que en los partidos tradicionales⁹. Y en un panorama de movilidad electoral importante, el FA es en los últimos tiempos el partido que más retiene a sus votantes. La movilidad se manifiesta al interior, beneficiando de manera variable a las fracciones que en cada elección compiten mejor por el voto «frentista» y en las franjas de crecimiento, con una buena ubicación respecto a las candidaturas de punta y los liderazgos de turno¹⁰. La «unificación» tiende a agudizarse bajo la égida de Tabaré Vázquez, por su forma de mando y con la pretensión de que el Encuentro Progresista opere como un conjunto mayor, en el que quede comprendido y eventualmente diluido, el Frente Amplio.

Esta transformación va acompañada de cambios importantes en el arco de unidades constitutivas, con el resquebrajamiento del Partido Comunista –que tiene consecuencias muy importantes, a nivel partidario y en la central sindical— el desprendimiento y a su vez la aparición de sectores relevantes, una modificación significativa en la estructura de liderazgo, en la que sobresalen las

En las elecciones nacionales de 1994, dos sectores nuevos, creados en su arranque como agrupaciones frenteamplistas, obtienen cerca de la mitad de los votos emitidos en favor del lema FA/EP. Asamblea Uruguay, dirigido por Danilo Astori, se ubicó largamente en el primer lugar, con el 38,6% de los votos frenteamplistas. La Vertiente Artiguista, que viene de afluentes anteriores, sacó el 9,3%. Del lado de los miembros originarios: el Partido Socialista obtuvo el 17,7%, lo que quedó del Partido Comunista (luego de varios desgarramientos) llegó al 9,2% y el Partido Demócrata Cristiano, que se reenganchó en el Encuentro Progresista, después de

pasar por el Nuevo Espacio, consiguió un 3%.

_

⁹ El Partido Colorado y el Partido Nacional, que nacieron con el país en la primera mitad del siglo XIX y se cuentan entre los partidos más antiguos del mundo, junto a los de Colombia o los de Estados Unidos.

¹⁰ En 1984 el sector de Hugo Batalla se llevó arriba del 39% de los votos del Frente Amplio. En 1989 la tajada mayor correspondió a Democracia Avanzada (un agrupamiento formado por el Partido Comunista antes de estallar, que en 1984 había conseguido el 28,3% de los votos frentistas). En 1994, como vimos, Asamblea Uruguay, el sector de Astori, quedó en punta con el 38,6% de los votos. Según una encuesta de la empresa Factum (publicada en el semanario *Búsqueda*, 16/7/1998), la intención de voto dentro del FA coloca al Partido Socialista a la cabeza con 25, Asamblea Uruguay baja al 13%, en paridad con la Vertiente Artiguista,

jefaturas personales, un caudillismo de izquierda que ha pasado por una sucesión de figuras y de estilos –desde Seregni a Vázquez– la apelación popular y populista, en claves electorales y plebiscitarias.

Seregni –que se ganó las jinetas en los lances del 70 y con casi diez años de prisión durante la dictadura– representa como nadie la evolución que arranca en la década del 80, poniéndose a la cabeza de la integración democrática y de la proyección de la izquierda como actor nacional, en una sintonía que debió combinar la construcción partidaria y los equilibrios del FA, con el desarrollo político y la participación en los procesos decisorios, la aspiración de llegar al gobierno y las prácticas del compromiso, a través de un bordado interno paciente y complicado, que muchas veces atrapa y paraliza.

Vázquez toma el relevo, al principio en convergencia con Seregni, luego compitiendo con él y con Danilo Astori, en una performance de tonos diferentes, en otra fase del FA y en otra fase del país, que se extiende sin embargo sobre líneas de continuidad. Es un líder de carisma personal, pragmático y ubicuo, decidido y eficaz, con dotes de mando y de arbitraje, que demostró capacidad, autonomía y moderación en los ejercicios inaugurales de la administración capitalina y se entrenó en campañas exitosas. Encarna y transmite como nadie la creencia en el triunfo -tanto para sus partidarios como para sus opositores- sin apego a un proyecto de tipo programático, obrando sobre todo como candidato a ganador, que juega fuerte y que exaspera a los adversarios. Al igual que Seregni y sin perjuicio de una discreta pertenencia al Partido Socialista, luce como personalidad común del Frente Amplio y hacedor del Encuentro Progresista, cultivando una condición dual (de «outsider-insider» ante la profesión política). Así, cosecha poderes y adhesiones en las estructuras partidarias y por encima de ellas, obteniendo su caudal electoral propio y haciendo valer sus ases concentradamente, con una silueta populista y apelaciones de corte plebiscitario.

Lógica de oposición y lógica de gobierno

Con estos trazos, la izquierda llega a disponer de un piso considerable y alcanza una audiencia electoral que la coloca en carrera para 1999. No obstante, las expectativas de futuro presentan problemas que nacen precisamente de las formas en que se ha ido dando su desarrollo. En sí mismas, las claves de prosperidad albergan contradicciones y dificultades.

Un nudo mayor está en el manejo afinado de los dos componentes de la acción política: la lógica de oposición y la lógica de gobierno. Cosa que le ocurre a cualquier partido, pero que en el caso de la izquierda resulta más problemático, en virtud de su historia y de su propia configuración, porque supone un debut trabajoso, dado el énfasis de sus posturas y el cariz de la escena nacional, las resistencias que despiertan sus códigos de expansión.

En esta línea hay por lo menos tres cuestiones enlazadas. Primero, la necesidad de armar su oferta política, en un tiempo de aceleración de los procesos de reforma estructural, de cambios importantes en las coordenadas nacionales, regionales e internacionales. En un contexto de competencia muy

cerrada y con los partidos tradicionales llevando desde hace rato la delantera, en la ideología y en las realizaciones. Este cuadro no deja demasiado margen de maniobra, ni tolera muchos artículos de promesa. Y a la par, requiere de una dosis extraordinaria de innovación, en un esfuerzo por delinear programas de alternativa consistentes, con problemas similares a los que enfrenta la izquierda de otros países, sin acumulación en las prácticas de gobierno y habiendo quedado en las trincheras de una oposición distante, lo que puede ser un elemento de fortaleza, pero también un flanco de debilidad. Segundo, la necesidad de ajustar la textura partidaria, los ejercicios de disciplina, la composición entre sectores más radicales o más moderados, afirmando la primacía que éstos pueden tener, para acomodar el conjunto a los requerimientos de una conducción ágil, dotada de autonomía, de entereza y de credibilidad. Manteniendo a la vez la pluralidad y las exigencias de pluralismo, que pesan hacia adentro y hacia afuera. Tercero, la necesidad de conseguir puntos de apoyo entre los cuadros dirigentes y los votantes de los demás partidos, para poder ganar y llegado el caso, poder gobernar.

Durante varios años las tribulaciones del FA han girado en gran medida en tomo de estos ejes, centrándose en la posibilidad y en las formas distintas de encarar desde el llano, la lógica de gobierno y la lógica de oposición, en términos de responsabilidad política y con proyección nacional. Este contencioso da lugar a conflictos sucesivos y entrecruzados –que marcan severamente las relaciones interiores y colorean la imagen externa– incluyendo la fuga de sectores centristas, la rivalidad sobresaliente entre Vázquez y Astori, ligada a una disputa por el cetro entre Vázquez y Seregni, que lleva a éste a renunciar a la presidencia del FA (en febrero de 1996, el día que se festejaban los 25 años de la agrupación).

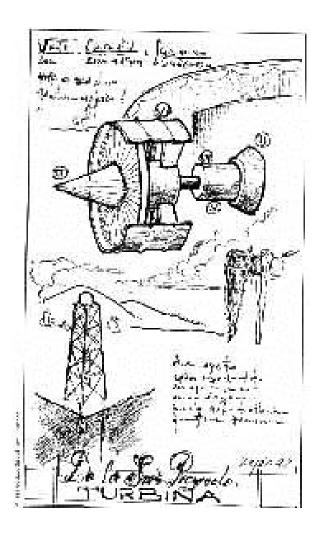
Las últimas elecciones internas y el trámite de algunos asuntos importantes han consolidado el dominio de Vázquez, a nivel de aparato, dentro del círculo de militantes y de adherentes. Pero ello no resuelve las cuestiones planteadas y deja en pie las interrogantes acerca del diseño político. En particular, queda pendiente el problema de la construcción de mayorías, para la elección nacional y para un eventual gobierno, más allá del radio de convocatoria del FA. Lo que supone un tejido de propuestas conducentes, difícilmente podrá hacerse sin despegar de cierto «internismo» –que el propio Vázquez se ha encargado de denunciar- y sin el concurso de otras voluntades.

Con la Constitución anterior, el FA tenía posibilidades de ganar en solitario. Después de 1996 esto se ha hecho más difícil, si no remoto. Por lo demás, dado el arco de pluralidad existente, ahora –como tampoco antes– ningún partido está en condiciones de gobernar por su cuenta, sin compromisos o coaliciones.

Algunos abrigan una ilusión mayoritaria, con esos sentidos de hegemonía que la izquierda aun arrastra. Y el mismo Vázquez alardeó en un momento con ganar de plano en la primera vuelta. Esto es bastante improbable. Lo que es posible –si las tendencias actuales se mantienen– es que la izquierda frentista acceda a la segunda vuelta. En tal caso tendrá que lidiar con contrincantes de los partidos tradicionales.

Para que uno de ellos corra con chances debe imponerse en las primarias de su partido, puesto que –a diferencia de lo que ocurre en el FA– hay en esas tiendas varios candidatos internos. Con miras a la primera y a la segunda vuelta presidencial, debe ser capaz de juntar bien a los suyos y de hacerse del voto «flotante», con un trasiego de las adhesiones de blancos y colorados, por encima de banderías. Esto ha ocurrido en elecciones anteriores y tiende a ampliarse con el incremento de la movilidad ciudadana, pero ahora debe darse en forma extensa y con el empuje de la segunda vuelta, que es una novedad absoluta. Habrá que ver si en ese camino se suman eventualmente algunos votantes del Nuevo Espacio.

Vázquez tendrá que hacer otro tanto, venciendo las resistencias que sus modales despiertan entre algunos frentistas, apostando a que los votos del Nuevo Espacio se dividan y lo acompañen lo más posible en el segundo turno, captando asimismo «flotantes» y «mulantes», de la primera ala segunda vuelta, en la franja de disputa con los partidos tradicionales. El estilo de liderazgo y el tipo de oposición que ha practicado en los últimos tiempos, subrayando la diferencia y las críticas, marcando distancia con los otros tres conjuntos, sobre todo con los partidos tradicionales –que multiplican por su lado las muestras de hostilidad- tiene ciertas ventajas, pero tiene también inconvenientes.



La ilustración acompañó al presente artículo en la edición impresa de la revista